

UNIVERSIDAD Y DEMOCRACIA

Como parte del acuerdo firmado por los partidos tradicionales a finales de la década del cincuenta y que concluyó con la instauración del Frente Nacional, se estableció en nuestro país un modelo de democracia restringida, régimen bipartidista y excluyente que condenaba como ciudadanos de segunda clase a quienes tuvieran opiniones políticas diferentes a las de los partidos garantes del pacto. Fue entonces cuando la Universidad, semillero de ideas fecundas durante los años de la República Liberal y bastión de lucha contra la dictadura durante las jornadas del 8 y 9 de junio de 1954 y el 10 de mayo de 1957, empezó a alejarse de quienes abanderaban el ejercicio político al interior de los partidos tradicionales, pues éstos, burocratizados y temerosos de la confrontación ideológica, miraron con desconfianza y molestia al Alma Mater, rehuyendo su actitud crítica y dejando campo abierto para que se insinuara un profundo divorcio entre los políticos que dirigían el país y los pensadores y académicos que se cuestionaban sobre la validez del sistema y la necesidad de nuevos modelos de desarrollo.

Durante la década del sesenta y comienzos del setenta, propuestas cada vez más audaces y radicales conquistaron la imaginación de profesores y estudiantes, que por la misma dinámica social empezaron a actuar como sector marginal, cuyas propuestas e iniciativas parecían siempre en contravía de los planes gubernamentales. Las utopías socialistas, animadas por el triunfo de la Revolución Cubana, la experiencia asiática y el surgimiento de movimientos revolucionarios en América Latina, ocuparon casi por completo el interés y los esfuerzos de las mentes más lúcidas de la comunidad universitaria. Grandes debates ideológicos sacudieron a la Universidad, que se sintió cada vez más comprometida con un pueblo sin voz, excluido de las grandes decisiones nacionales. El papel del intelectual pareció fundirse con los

anhelos populares y hacer causa común con los marginados, para lograr una democracia plena y una Universidad de masas que respondiera solidariamente a las urgencias de nuestro pueblo. La idea de una responsabilidad del Estado que implicaba una total independencia frente a la Iglesia en materia educativa se puso de presente con la propuesta de Escuela Nacional Laica y Unica. Pero la respuesta gubernamental ante el ímpetu universitario, al igual que ante las movilizaciones populares que intentaban forjar nuevos caminos a la nacionalidad, fue la de recurrir a un régimen de excepción para tratar el malestar social como problema de orden público, convirtiéndose una medida transitoria como el Estado de Sitio en la legalidad permanente del aparato institucional.

Ante una confrontación cada vez más radical que propiciaba el enfrentamiento con los órganos armados de la Nación, el debate ideológico al interior de la Universidad fue cediendo paso a posiciones que propendían por una política de militancia y reclutamiento, imbuída de sectarismo y animada por una mentalidad francamente marcial. La polarización que tal actitud inducía en sus seguidores y el desprecio por las tareas puramente académicas, llevaron a la constitución de minorías intolerantes y mesiánicas que de manera paulatina se fueron aislando del conjunto de la comunidad universitaria, la que a su vez iba colocándose al margen de las consignas y los llamados a la lucha. Pareció entonces que para hacer trascender las ideas de cambio más allá de los predios universitarios, el único camino expedito era producir "hechos políticos" que tornaran a la Universidad en noticia por las pedreas y por el número de heridos y muertos que producían los frecuentes enfrentamientos. Durante varios años, el país sólo supo de la Universidad como problema de orden público y los sucesivos cierres convirtieron la consigna por la reapertura del Alma Mater en grito repetitivo

de asambleas y manifestaciones que cada vez conmovían menos a la ciudadanía. Al cabo del tiempo, una apatía generalizada frente a las discusiones políticas y una resistencia pasiva a las organizaciones de izquierda condujeron a la Universidad a una situación de marasmo que se convirtió después en repudio activo contra la intransigencia doctrinaria de aquellos que querían hacer del campus universitario escenario de amenazas y batallas. Probablemente ello explique el hecho de que según encuesta realizada a fines de 1988 un amplio grupo de estudiantes, 59.3%, se consideraran de centro; un 15.7% de derecha y un 25% se proclamaran de izquierda. Durante los últimos años, esfuerzos conjuntos de los diferentes estamentos universitarios permitieron conjurar en gran parte los problemas ligados a los intentos de instrumentación política de la Universidad abriéndose camino a una pacificación que expresaba, así fuera de manera implícita, una actitud política cada vez más alejada de la tentación totalitaria, con la que tanto coquetearon los intelectuales y universitarios en épocas anteriores.

Las huellas del conflicto, quedaron sin embargo dolorosamente impresas en la institución. A partir de los cierres recurrentes, la Universidad fue vista por muchos sectores del país como un error político y administrativo que sólo generaba costos y riesgos innecesarios, provocándose hacia ella en unos casos hostilidad y en otros indiferencia. El temor a una Universidad Estatal fuerte llevó al florecimiento de un archipiélago de universidades con un rápido desarrollo de universidades privadas muy heterogéneas en su calidad. Con los años, el nivel político y cultural que animara al movimiento estudiantil en sus comienzos bajó considerablemente, quedando reducido a la consigna, ajena por completo al debate ideológico. La Universidad no era para muchos grupos más que un lu-

gar de paso, sitio de reclutamiento para emprender tareas de insurgencia ajenas al destino del Alma Mater. El activismo armado se convirtió en una constante y la discusión y el debate de las ideas fueron suplantados por el poder de las balas y por el fanatismo.

A pesar de todo, grupos moderados de profesores y estudiantes de manera silenciosa y persistente lograron conservar la Universidad para sus propósitos académicos y hoy, saliendo de una larga noche, la institución parece preparada para un nuevo renacer. Prevalece hoy una conciencia política que condena todo activismo armado y que se muestra dispuesta a preservar los fueros de la Universidad, manteniéndola por fuera de la guerra, limpia o sucia, que algunos insisten en implantar. Queda claro, que bajo ninguna circunstancia puede la comunidad universitaria permitir que el "arma de la crítica" sea reemplazada por la "crítica de las armas", pues va contra la esencia misma de la Institución tornarse campo militar o territorio en manos de grupos armados. Queda claro también que la Universidad no puede entender su autonomía como extraterritorialidad, sino como autodeterminación en sus destinos académicos y campo privilegiado para la discusión de las ideas. Los universitarios son ciudadanos sometidos a las leyes de la República y ninguna inmunidad los protege si optan por el camino delictivo o deciden enfrentar por la violencia la legalidad de la Nación. Más que territorio independiente, la Universidad es espacio responsable de su misión: brindar luces al país para que pueda conducirse por los senderos de la inteligencia. Por eso, frente a la intolerancia armada, venga de donde viniere, la Universidad debe actuar solidariamente defendiendo su esencia, y buscando el apoyo si fuere necesario de la Autoridad legítimamente constituida. El libre derecho de los ciudadanos a expresar sus ideas y proponer nuevas alternativas de desarrollo, sin

que por ello se vean amenazadas sus vidas o coaccionados por ideas extrañas a la libertad de crítica y a la divergencia de pensamiento, es el presupuesto fundamental del quehacer universitario.

Pero declarar la Universidad territorio privilegiado del discurso y de los debates de la inteligencia, alejada del activismo armado, no es todavía garantía suficiente de que pueda integrarse al ejercicio democrático. Así como la Universidad entró en crisis, y se ve ahora en la necesidad inaplazable de redefinir su papel, también hoy, a doscientos años del movimiento político que sirvió de paradigma a las democracias occidentales, la palabra democracia ha entrado en crisis. Se muestra la mayoría de las veces como término abstracto; las más disímiles ideologías la utilizan indiscriminadamente, y sirve incluso para apuntalar intereses antipopulares. La definición de la democracia en términos de "bien común" o "gobierno de las mayorías", no satisface ya nuestras necesidades de convivencia política. Más allá de una ciudadanía y un voto universales, y de un reconocimiento formal de igualdad a todos los seres humanos, es necesario tener en cuenta las facilidades de acceso real a los mecanismos de poder que para su desarrollo exigen los diferentes sectores de la sociedad. La democracia debe pensarse, no tanto como el acceso al botín burocrático de una u otra facción, sino como una ética del poder que compromete a quienes se encuentran en niveles directivos a permitir el surgimiento y desarrollo de las diferentes particularidades que aparecen en una sociedad. Permitir el desarrollo creativo de diferentes propuestas, gestadas al calor de las auténticas necesidades comunitarias, parece ser una forma efectiva de mantener el pluralismo y asegurar que los recursos del Estado y de la Sociedad estén al servicio de los grupos o individuos que los requieran para concretar sus propuestas y progra-

mas. Esto implica, por supuesto, dar cauce a los anhelos de participación económica y política, luchando contra actitudes bonapartistas que pretenden centralizar recursos y decisiones y favorecer así modelos de concentración que conducen a la postre a la consolidación de núcleos despóticos y oligárquicos.

Es tarea prioritaria de la Universidad ayudar a construir este nuevo concepto de democracia que definirá para las próximas décadas el tipo de vida y convivencia que los colombianos deseamos. Como espacio destinado a la investigación científica, la crítica, la argumentación y el enfrentamiento desde el poder de la inteligencia y la palabra, la Universidad se muestra asimismo como escenario social privilegiado para ejercer la democracia. Convertida por tradición cultural en foro donde se discute sin restricciones desde la perspectiva del conocimiento, por su propio ejercicio científico la Universidad es también paradigma de lo que debe ser una convivencia democrática. En efecto, si la característica central del pensamiento científico es reconocer la existencia de campos de validez teniendo presente tanto las posibilidades de aplicación de un conocimiento como sus limitaciones, podemos entender la democracia como un ejercicio similar al pensar científico en el campo de la praxis social, donde es menester reconocer posibilidades y limitaciones de nuestro discurso, estar dispuestos a que los demás develen nuestra ignorancia, ser capaces de reconocer que no somos propietarios de la verdad y que, bajo ninguna circunstancia, podemos imponer de manera unilateral nuestras ideas y convicciones. De allí que como parte de nuestro programa de desarrollo científico y tecnológico, consideremos de vital importancia la definición de un Proyecto Cultural para la Universidad que trabaje por favorecer un clima científico que confluirá necesariamente con la dinamización de los mecanismos democráticos.

La tarea de democratizar la Universidad debe ir acompañada de un renacer académico que permita y fomente la creatividad y asegure la más alta expresión de la inteligencia. Si la Universidad y la Democracia no son tareas acabadas sino propósitos en cuya construcción estamos comprometidos, también la vida académica debe entenderse como campo de experimentación donde pueda surgir la pericia investigativa necesaria para cumplir con la meta que nos hemos propuesto de convertir a la Universidad Nacional en eje de las estrategias del país en el campo de la Ciencia y la Tecnología cuyas metas deben mirar hacia el largo plazo, tomando como referente mínimo el año 2.000. Es, pues, el momento de iniciar un vasto trabajo de reestructuración académica que nos permita impulsar las escuelas de Altos Estudios, elevando la calidad de nuestros postgrados y reordenando el pregrado, para que activamente vinculado a los problemas del país, sirva también al propósito de crear una auténtica cultura académica en nuestros estudiantes. Es necesario pensar en los mecanismos de ejercicio del poder que se esconden en la relación maestro-alumno, los que en ocasiones no tienen la suficiente flexibilidad para promover la creatividad y la actitud investigativa. Conviene, en fin, a la Universidad en tanto se presente como proyecto democrático, flexibilizar sus estructuras internas y dar paso a una discusión creadora sobre las mejores vías para alcanzar un mejor aprovechamiento de nuestras potencialidades académicas. Por nuestra parte, estamos dispuestos a favorecer toda emergencia de nuevas ideas, facilitando su discusión, sometiéndolas a la confrontación sana, ajena a todo autoritarismo. La Universidad debe formar a sus auténticos líderes, proporcionando los medios para la discusión argumentada, que nada tiene que ver con la locuacidad del agitador. Con razón se dice que en cada intelectual se esconde un redentor...

Como parte de este proceso de democratización, que asegura el acceso a la Universidad de los más capaces, sin distinciones de origen social o condición económica, la actual administración se muestra interesada en defender la Institución como patrimonio de la inteligencia, a cuyo campus se ingresa en justa lid que recompensa a los mejores estudiantes provenientes de las diferentes regiones del país. Un sistema de promoción interna, que asegura a los estudiantes calificados un decidido apoyo institucional para continuar sus estudios, se completa hoy con la propuesta de favorecer a los jóvenes de provincia que se destaquen en su desempeño académico y cuya situación económica limite su ingreso a la Universidad, para que, ayudados por un sistema de préstamo-beca desde el primer semestre, puedan compensar las trabas que se presentan todavía para el acceso de sectores marginales a la educación superior. Creemos que de esta manera a los mecanismos ya existentes de apoyo y bienestar estudiantil se suman nuevas formas de democratización, acordes con los fines que desde su fundación ha defendido la Universidad.

Dado su liderazgo intelectual en el país, la Universidad Nacional junto con otras instituciones de probada excelencia debe asumir plenamente su papel de generadora de ideas y propuestas, de forjadora de la Nación, desarrollando sobre bases científicas y éticas, una nueva concepción de Universidad donde la academia y la política no estén divorciadas y por el contrario su reconciliación permita que nuestra Alma Mater sea semillero de ideas fecundas y canteira de líderes visionarios capaces de superar el plano de la crítica y el diagnóstico y de articular con brillantez sus ideas a un proceso de construcción nacional que a todos nos incumbe.

Ricardo Mosquera Mesa
Rector.